

POPULISMO ELECTORAL

La semana pasada, diputados oficialistas sorprendieron con el avance de dos proyectos que buscan capturar el voto electoral en período de campaña, pero cuyas consecuencias sociales, económicas y financieras podrían resultar nefastas para quienes pretenden beneficiar, de acuerdo con las advertencias de autoridades y expertos. Mientras en la Comisión de Trabajo, con votos del PS, PC y del FA se aprobó en general la moción de eliminar el tope de 11 años para la indemnización por años de servicio; en la de Economía, legisladores de los mismos partidos hicieron lo propio con la eliminación de la UF como sistema de reajustabilidad, pese a la opinión en contra del Gobierno del que forman parte.

En el marco de un mercado laboral presionado por la puesta en marcha de una serie de leyes que han buscado fortalecer la seguridad y los derechos de los trabajadores, pero que han elevado los costos de contratación, la primera de las medidas, lejos de favorecer el empleo, incentivaría la informalidad y las ocupaciones temporales de baja calidad. Y aunque las cifras abundan, en período de campaña parece resultar más rentable prometer beneficios, que explicar sus consecuencias de mediano plazo, sobre todo si estas son nocivas. En un mundo global, donde la competitividad es clave, las cifras de la OCDE reflejan que Chile se ubica entre los ocho países con mayores costos de despido entre las 38 economías del bloque, lo que hace incomprensible que se pretenda seguir encareciendo la contratación formal.

En un contexto en que la tasa de desocupación no baja del 8%

desde hace dos años, propuestas como las presentadas por los 17 economistas que elaboraron el documento El Puente resultan más serias y realistas. En lugar de encarecer las desvinculaciones, plantean crear un sistema de indemnización a todo evento, financiado por cotizaciones, que fomente la movilidad y reduzca los incentivos a la informalidad.

Sobre la eliminación de la UF, el ministro de Hacienda fue tajante. “Sería un terremoto para el crédito hipotecario en Chile, en un momento de déficit habitacional”, argumentó en la Comisión de Economía, donde no fue oído. Fue un déjà vu de sus advertencias como presidente del Banco Central, cuando

también intentó infructuosamente que los parlamentarios que enarbolaban los retiros previsionales como bandera de campaña comprendieran sus nefastas consecuencias económicas y financieras, que todavía arrastramos. En un oficio a la comisión, la presidenta del Banco Central profundizó

en las advertencias: la eliminación de la UF puede terminar aumentando el costo del financiamiento de la vivienda y perjudicando justamente a quienes se pretende proteger, aseguró en un análisis que los legisladores bien pudieron pedir antes de impulsar la iniciativa, pero eso les habría exigido ceder protagonismo a los datos y optar por el rigor por sobre el relato.

El avance de estas iniciativas deja a la vista la desconexión entre el oficialismo y el Gobierno en plena temporada electoral, lo que abre una tensión preocupante entre responsabilidad y oportunismo; sin embargo, aún hay margen para que prime la cordura técnica.

Para algunos legisladores parece más rentable prometer beneficios sin base técnica, que detenerse en sus consecuencias.